

**NDI - NATIONAL DEMOCRAT INSTITUTE –
(Instituto Democrático Nacional)**

Retos y oportunidades en América Latina

Presentado en

“El Estado de la Democracia en América Latina y el Caribe”
Comité del Senado para Relaciones Exteriores

Enviado por
Deborah Ullmer
Directora Regional para
América Latina y el Caribe

24 de marzo de 2021

Trabajando para la Democracia y
Haciendo que la Democracia Funcione

WWW.NDI.ORG

Presidente Menéndez, Miembro de Alto Rango Risch y miembros del Comité, gracias por esta oportunidad de dirigirme al Comité en esta oportuna audiencia sobre el “Estado de la Democracia en América Latina y el Caribe”.

Tengo más de 20 años de experiencia en la gestión de una gama de programas de asistencia a la democracia y los derechos humanos en la región de América Latina y he pasado la mitad de mi carrera viviendo en Guatemala, Guyana, Honduras y Nicaragua.

La organización a la cual represento, el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés) se dedica a fortalecer la gobernanza democrática, sus prácticas e instituciones a nivel mundial. NDI ha trabajado en América Latina y el Caribe durante casi 35 años apoyado por varias organizaciones internacionales de asistencia, incluyendo la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la Fundación Nacional para la Democracia, La Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo del Departamento de Estado, La Agencia Sueca de Asistencia para el Desarrollo Internacional, Asuntos Mundiales de Canadá, la Fundación de Open Society, el Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores y la Fundación Howard G. Buffett. Hoy en día, NDI tiene seis oficinas nacionales en Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras y México. Regularmente nos asociamos con otros países en programas regionales sobre seguridad ciudadana, integridad en las elecciones, rendición de cuentas y transparencia, diálogo sobre reformas políticas y la lucha contra la desinformación. Nuestro trabajo con grupos cívicos, funcionarios de gobierno, legisladores y partidos políticos de todas las ideologías políticas a nivel nacional y local nos expone diariamente a diversas perspectivas, desde altos líderes políticos hasta los activistas de base y nos informa sobre las siguientes observaciones.

Tendencias claves y maneras de abordarlas

El 11 de septiembre de 2021, la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará el 20 aniversario de la innovadora Carta Democrática Interamericana. Desde que se adoptó la Carta, ha habido muchos retos para la gobernanza democrática, incluyendo un aumento de líderes autoritarios y populistas, elecciones cuestionadas, falta de democracia, consolidación de la corrupción y una prevalencia creciente de la tergiversación y la desinformación, así como influencias mezquinas. La severidad de la pandemia del COVID-19 agravó las desigualdades sociales y económicas duraderas de vieja data y aumentó los retos de la democracia y los derechos humanos. La recuperación post pandémica y los esfuerzos desiguales del despliegue de las vacunaciones pueden avivar el descontento social en la región y abrir posibilidades de más populismo. La movilización social en la historia reciente ha demostrado que existe un desborde popular sobre la necesidad de un cambio, pero no hay consenso sobre cómo se debería ver su futuro. Además, la magnitud de los movimientos migratorios a causa del crimen, la corrupción, la impunidad, la pobreza, el cambio climático y otras vulnerabilidades está creando una crisis humanitaria en la región.

Recaída de la democracia

Aunque en América Latina se sigue experimentando recaída de la democracia, sigue siendo “la región más democrática emergente en el mundo, sólo detrás de Europa Occidental y los Estados Unidos” según el estudio más reciente de [“The Economist”](#) sobre el estado de la

democracia. Este punto pone en relieve el potencial continuo que tiene el hemisferio occidental para seguir progresando en la libertad, las oportunidades y la prosperidad y para profundizar sociedades productivas con Estados Unidos.

No obstante, en los últimos 15 años, las posibilidades de la consolidación de la gobernanza democrática se han debilitado con el aumento de gobiernos autoritarios y líderes con tendencias populistas. Actualmente, en América Latina, tres países son clasificados por el Informe de Freedom House – [Informe del 2021 sobre Libertad en el Mundo](#) – como países “Sin Libertad”, y éstos son Cuba, Venezuela y Nicaragua, todos los lugares donde NDI no puede abrir sus oficinas o ha tenido que cerrarlas. NDI ha observado los costos para los derechos humanos provocados por los gobiernos que han utilizado la Pandemia del COVID-19 para acentuar su autoridad más centralizada mediante sus períodos de mandato a nivel mundial.

A inicios del año 2021, el régimen de Nicolás Maduro asumió el control sobre las últimas instituciones democráticas que quedaban en Venezuela a través de elecciones legislativas rechazadas por la comunidad internacional por ser ilegítimas. El autoritarismo de Maduro es responsable del descenso del país hasta un colapso económico. La Asamblea Nacional apoyada por el régimen está discutiendo 33 anteproyectos de ley para consolidar el poder de Maduro reduciendo aún más la libertad de expresión, restringiendo la cooperación internacional y estableciendo menos controles económicos que permitirán a los compinches del régimen operar con más libertad. La crisis humanitaria también se ha intensificado en meses recientes como resultado de la destrucción de los servicios básicos, la escasez de gasolina, los bajos salarios y el alto costo de la vida exacerbado por el COVID-19. Al menos 5.5 millones de venezolanos han huido a países vecinos en América Latina; las Naciones Unidas estiman que la población de refugiados venezolanos aumentará a 8.1 millones a finales del año 2021. El gobierno revocó una ley que exigía las elecciones gubernamentales y municipales se realizaran en fechas separadas antes del final de año. Esto permitiría al régimen realizar una súper elección en 23 estados y 335 municipalidades consolidando de esa manera el poder a nivel local. No existen soluciones fáciles ni rápidas para la crisis de Venezuela. **Aun así, a largo plazo Estados Unidos debe continuar ayudando a los venezolanos a crear las condiciones para un regreso a la democracia mediante elecciones libres, justas y creíbles.**

Nicaragua constituye otro “déficit para la democracia” en la región. La actual crisis socio-política de Nicaragua comenzó en abril de 2018 cuando protestas populares generalizadas por las reformas a la seguridad social desembocaron en más de 325 muertes a manos de la policía y fuerzas paramilitares según un sinnúmero de informes de derechos humanos, así como en la violenta represión que sigue hoy en día. A finales del 2020, el régimen de Daniel Ortega aprobó una serie de leyes draconianas que violan las libertades fundamentales y socavan aun más el estado de derecho. En octubre de 2020, la [OEA adoptó una resolución](#) exhortando al gobierno de Nicaragua a “respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos, las libertades fundamentales y a realizar elecciones libres y justas” que están previstas para el 7 de noviembre de 2021. Grupos democráticos de oposición política y grupos cívicos buscan como unificarse y competir en las elecciones, lo que representa la mejor oportunidad para que los nicaragüenses recuperen su libertad y la democracia. **Es esencial que Estados Unidos presione por las mínimas condiciones para elecciones**

creíbles en Nicaragua, lo que incluye la plena participación de la oposición democrática sin restricciones, la transparencia mediante observadores nacionales e internacionales y la rendición de cuentas en todos los niveles del proceso electoral.

Aunque la represión gubernamental ha obstruido a los activistas democráticos en Cuba, siguen expresando sus aspiraciones a más libertades. Durante los últimos meses, la energía cívica y el volumen de protestas pacíficas aumenta exhortando a la libertad. También existe una creciente frustración pública con el gobierno cubano por la libertad económica y el acceso a los recursos básicos en mitad de una crisis humanitaria exacerbada por el COVID-19. Las recientes protestas pacíficas de artistas, periodistas y activistas cubanos llamando a la libertad de expresión y de la expresión artística son las más grandes manifestaciones en la isla durante los últimos 60 años. Esta iniciativa recalca la demanda de los cubanos de disfrutar de la misma libertad y derechos humanos de los demás en todo el hemisferio. En este particular, la sólida aprobación bipartidista del Comité de la S. Res. 37 en favor del Movimiento de San Isidro se destaca como un centro de atención sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y ofrece apoyo esencial a los activistas cubanos. **Como ya NDI ha exhortado en el pasado, “Estados Unidos y otros actores internacionales deben seguir presionando al gobierno cubano para que acate la [Declaración Universal de los Derechos Humanos](#)”.**

Aumento en el populismo y nuevos e irresueltos problemas de integridad electoral

Este año se dará un súper ciclo electoral en la región en un telón de fondo de las poblaciones devastadas por la pandemia del COVID-19. El decrecimiento económico por la pandemia y la violencia criminal persistente han afectado negativamente la calidad de vida y le han dificultado al gobierno cumplir con sus promesas de mejorar la vida de los ciudadanos. En consecuencia, el liderazgo sin trayectoria política está en peligro de elevarse ya que el prestigio de los partidos políticos para brindar democracia ha caído en toda la región.

No obstante, hay señales positivas para la posibilidad de renovación. Chile, una democracia de vieja data, empezará una de sus ciclos electorales más complejos en su historia reciente, dando una oportunidad al país para que redefina su constitución y [“forje un nuevo pacto social”](#). Las protestas en 2019 llevaron a un referendo constitucional que fue aprobado en octubre de 2020 para sustituir la constitución de la era de Pinochet. Las elecciones locales y de la asamblea constituyente están programadas para el 10 y 11 de abril y las elecciones presidenciales y legislativas para noviembre. La Asamblea debe elegir a número igual de mujeres y hombres y 17 curules están reservados para pueblos indígenas de entre 155 miembros; una mayoría de dos tercios debe aprobar la constitución. Dado el interés actual en la región y las reformas constitucionales, Chile podría una vez más servir de modelo para la región.

Haití también planea un ciclo electoral complejo. A inicios de este año, el Consejo Electoral Provisional Haitiano anunció planes de realizar un referendo constitucional (27 de junio), elecciones presidenciales de primera ronda, Cámara de Diputados y Senado (26 de septiembre) y segunda votación y elecciones de gobiernos locales (21 de noviembre). En Haití, al igual que en el pasado, la necesidad de elecciones con plazo vencido y pendientes sigue siendo puntos de conflicto. El diálogo guiado por los haitianos será esencial para

encontrar puntos de consenso político y un sendero de progreso en las elecciones, incluyendo la restauración de las operaciones de la rama legislativa y el final del gobierno por decreto.

Según [“The Economist”](#), el riesgo político es alto dadas las “tendencias en aumento del sentimiento de anti-incumbencia y la creciente preferencia por los populistas”. Figuras políticas no tradicionales pueden ganar las elecciones presidenciales en Ecuador y Perú (ambas el 11 de abril). Las elecciones de segunda vuelta en Ecuador se efectuarán entre un joven gabinete anterior apoyado por el ex presidente populista Rafael Correa y un banquero conservador y dos veces segundo lugar presidencial. En Perú, prácticamente ninguno de los candidatos tiene lazos cercanos con los partidos políticos que los postularon ni son figuras políticas tradicionales. Entre los candidatos se encuentra un ex portero del equipo de fútbol de Perú, un economista reconocido a nivel internacional y un líder de izquierda del Cuzco. NDI está trabajando con las autoridades electorales de los dos países para organizar debates presidenciales para ayudar a informarse a los votantes y promover la rendición de cuentas de los candidatos. El NDI también está apoyando iniciativas en los dos países para aumentar la participación política de las mujeres y ayudar a abordar la violencia contra la mujer en la política. Quien sea electo en cualquiera de los dos escenarios no tiene posibilidades de obtener apoyo significativo de un nuevo poder legislativo y tendrá que hacer alianzas para gobernar efectivamente.

Hasta ahora, las elecciones en el 2021 han sido polémicas. En febrero, las elecciones legislativas en El Salvador condujeron a una victoria con extraordinario margen para el partido *Nuevas Ideas* del presidente Nayib Bukele, lo cual dio al poder ejecutivo control total sobre el poder legislativo. Según la [misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos](#), las elecciones salvadoreñas se realizaron dentro de un contexto de “polarización y confrontación entre el presidente y los partidos políticos tradicionales y las figuras institucionales del país, incluyendo indicaciones de desconfianza en la autoridad electoral”. Un informe de la misión de pre-elección del [Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Centro de Asesoría y Promoción Electoral sobre las elecciones legislativas de mitad del mandato de México](#) (junio) destaca tensiones similares entre las autoridades ejecutivas y las electorales. Según el informe, “las tensiones salen a luz en un debate sobre el presupuesto para las elecciones, cuestionamiento público a la autoridad electoral y la regulación electoral de los breves informes matutinos regularmente del presidente mexicano, conocidos como *“mañaneras”*”.

Las elecciones también se realizarán en un telón de fondo de una “constante desconfianza ciudadana en las elecciones” según un estudio de [2018/2019 Proyecto de Opinión Pública de América Latina \(LAPOP\) apoyado por USAID \(LAPOP\)/Latino barómetro](#). En años recientes, los ciudadanos de la región han cuestionado sus elecciones presidenciales en Bolivia (2019), Ecuador (2017), Guyana (2020), Honduras (2017), Nicaragua (2011, 2016) y Venezuela (2017, 2018, 2020).

En Bolivia las repercusiones de las elecciones de 2019 y 2020 siguen siendo evidentes en el muy polarizado país. El gobierno del presidente Luis Arce recientemente encarceló a la ex presidente interina Jeanine Áñez y a dos ex miembros de su gabinete y emitió órdenes de arresto contra otros altos ex funcionarios por fomentar el “golpe” contra el ex presidente Evo Morales después de las elecciones de 2019. Las elecciones de 2019 fueron anuladas después

que irrumpieron protestas por alegatos de fraude según lo confirmado por los observadores de la OEA. Las acciones de Áñez se dieron después de una amnistía para los seguidores de Morales acusados de violaciones a los derechos humanos por Áñez. La naturaleza “expresa” de los arrestos socava el estado de derecho. Algunos analistas bolivianos ven los arrestos como una retribución para los procesos acusativos en contra de figuras del gobierno de Morales durante el mandato de la presidente Áñez. **Estados Unidos debe apoyar a las Naciones Unidas y a la OEA para exhortar al respeto de los derechos humanos y el debido proceso en Bolivia.**

Según lo identificado por el NDI, [varios desafíos persistentes a la integridad electoral](#) en el hemisferio son de particular preocupación, incluyendo “los esfuerzos de los líderes políticos para reducir la independencia de las autoridades electorales y ajustar las reglas del juego establecidas a su favor, como el uso de los tribunales para restringir la participación política e inyección de financiamiento político de narcotraficantes y otras fuentes ilegales”.

En Honduras, las elecciones del 27 de noviembre ocurrirán en el contexto de una reforma electoral incompleta que había prometido enfrentar los desafíos a la integridad electoral luego de las polémicas elecciones generales de 2017 que dejaron al menos 23 muertos producto de una violencia postelectoral. El 14 de marzo, Honduras celebró elecciones primarias para tres de los 14 partidos políticos registrados. Los candidatos incluyen funcionarios acusados o procesados por corrupción, uso indebido de fondos y lavado de dinero para un cartel de drogas. Además, los nombres del actual y ex presidente del país han salido a la luz en un juicio por tráfico de drogas en Estados Unidos. Un diálogo nacional facilitado por las Naciones Unidas en 2018 resultó en cambios electorales parciales. Las reformas incluyen nuevas tarjetas de identificación de votantes, una nueva autoridad electoral que incluye al partido del ex presidente Mel Zelaya y una nueva corte de justicia electoral, que carece de regulaciones para resolver disputas electorales. Los observadores electorales nacionales están pidiendo la aprobación legislativa de reformas completas en medio de los temores de que se repitan las elecciones de 2017. El NDI está trabajando actualmente para desarrollar puentes entre una red de monitores electorales nacionales, periodistas, organismos de control contra la corrupción, el sector privado y los partidos políticos junto con la autoridad electoral para prevenir o mitigar el potencial de conflictos y violencia relacionados con los comicios electorales.

Los observadores electorales en cooperación con los medios de comunicación independientes y las autoridades electorales deben continuar desarrollando técnicas para responder de manera más eficaz a [los nuevos desafíos a la integridad electoral](#). Los desafíos incluyen el creciente alcance de la desinformación difundida a través de las redes sociales para promover objetivos políticos y la piratería para el espionaje político e incluso el sabotaje de los sistemas de información electoral. El NDI ha trabajado con la sociedad civil y las autoridades electorales en Colombia, Ecuador y México para ayudar a identificar, rastrear y contrarrestar la desinformación. El NDI también está trabajando con grupos cívicos en El Salvador y México para monitorear la violencia electoral y política en línea contra las mujeres candidatas.

El apoyo a las elecciones democráticas es tanto una cuestión de respeto por los derechos políticos de los pueblos soberanos como una cuestión de paz y estabilidad regional e

internacional. Estados Unidos y la comunidad internacional en general deben promover la integridad electoral mediante el desarrollo de capacidades nacionales y el apoyo a la observación internacional de elecciones, lo que complementa los esfuerzos de los actores nacionales. Como lo pide el NDI, al menos “[tres principios](#) deben ser reforzados en toda la asistencia electoral para asegurar que las elecciones puedan resolver la competencia por el cargo de manera pacífica y reflejar con precisión la voluntad de la gente, incluyendo la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas”.

Corrupción endémica

Los países del Triángulo Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras están combatiendo crónicas problemas de violencia y crimen extendidos, élites corruptas vinculadas a redes criminales e impunidad de la ley por parte de los funcionarios públicos. Junto con la falta de oportunidades económicas, profundas desigualdades social y el impacto corrosivo de instituciones políticas que no responden, estos desafíos ayudan a impulsar la migración y socavar la democracia. La pandemia de COVID-19 ha aumentado aún más la presión sobre las instituciones democráticas ya frágiles y subrayó la necesidad de transparencia, supervisión y salvaguarda de los derechos democráticos fundamentales.

A este respecto, [los países del Triángulo Norte han visto un aumento en las denuncias de corrupción emergentes. del gasto pandémico del gobierno](#). En Guatemala, estalló el malestar social mientras el Congreso se apresuraba a aprobar el presupuesto nacional 2021. El proyecto de ley recorta la atención médica, la educación, la ayuda a la desnutrición, la justicia sector y el defensor del pueblo de derechos humanos. En el contexto de la pandemia y la destrucción provocada por los huracanes Iota y Eta, las manifestaciones que siguieron subrayaron el rechazo reprimido del gobierno que intenta detener la designación de miembros ante la Corte Suprema y de Apelaciones, controlar la selección del Tribunal Constitucional y, en general, revertir los esfuerzos anticorrupción. Bajo presión popular, el Congreso dio marcha atrás y no remitió el proyecto de ley de presupuesto al Poder Ejecutivo.

De manera similar, los tribunales hondureños desestimaron un caso contra dos docenas de legisladores relacionados con un vasto esquema de corrupción para malversar fondos públicos con fines políticos, que fue descubierto por la ex Misión de la OEA de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El año pasado, el presidente Juan Orlando Hernández no renovó el mandato de la MACCIH. En El Salvador, el gobierno ha hecho caso omiso de las sentencias de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de las políticas de cuarentena ante la pandemia del COVID-19 y retórica anti-medios para informar sobre la corrupción en los contratos gubernamentales. Las elecciones legislativas dieron como resultado el partido del presidente lograra una supermayoría en la Asamblea Legislativa y, en última instancia, permitir el control de todos los procesos de selección de funcionarios públicos, incluyendo a los jueces de los tribunales superiores y fiscales fundamentales para la lucha contra la corrupción.

Según un informe del [Wilson Center sobre la ayuda exterior de Estados Unidos en Centroamérica del 2014 al 2019](#), el factor más importante que contribuye al crecimiento limitado y al progreso social en el norte Triángulo es la resistencia a las reformas anticorrupción y de buen gobierno por parte de un pequeño pero poderoso conjunto de actores

políticos y económicos con un profundo interés en mantener el status quo. En los tres países, los socios reformistas del NDI dentro y fuera del gobierno han apoyado reformas políticas y electorales y, en algunos casos como en Guatemala, aseguraron respaldo político para la acción gubernamental y legislativa. Los legisladores reformistas han tratado de mejorar gobernanza democrática, promover iniciativas de transparencia e involucrar a los ciudadanos en las prioridades públicas. En Honduras, un frente de anticorrupción entre partidos, creado para trabajar en legislación para facilitar los esfuerzos de MACCIH, se enfocan en promover la apertura legislativa y arrojar más luz sobre el presupuesto nacional y otras acciones legislativas claves. Además, una [Coalición Anticorrupción](#), integrada por legisladores, jueces, activistas juveniles y activistas de la sociedad civil están trabajando juntos, en colaboración con algunos en el sector privado, para impulsar el cambio en Honduras.

Se necesita hacer mucho más para apoyar todos estos esfuerzos. En definitiva, el fortalecimiento a las instituciones democráticas y la lucha contra la corrupción y la impunidad reducen los incentivos para la migración. **Sin la acción de Estados Unidos en los próximos años para brindar mayor transparencia y responsabilidad a las instituciones políticas, es probable que otras medidas para mejorar la gobernanza en El Salvador, Guatemala y Honduras en línea con los objetivos de política más amplios de Estados Unidos no sean suficientes.**

Influencia creciente de los actores iliberales

Los crecientes desafíos económicos y sociales internos que enfrentan muchos países de América Latina, incluso antes de la pandemia del COVID-19, crearon circunstancias favorables para que Rusia y China promoviesen sus intereses. Desde 2018, [China](#) ha superado a Estados Unidos para convertirse en el mayor socio comercial fuera de México. Recientemente, China ha utilizado la actual pandemia del COVID-19 para pulir su imagen en la región, donando más de \$ 200 millones en kits de prueba, máscaras y otros [suministros médicos](#), y la publicación de anuncios de alto perfil sobre planes para distribuir sus [vacunas Sinovac y Sinopharm](#) a casi una docena de países de la región. Sin embargo, líderes políticos, civiles y actores sociales en algunos países están comenzando a visualizar y reconocer los riesgos producto del ofrecimiento de China. En Ecuador, los escándalos de corrupción que rodean a los chinos por la participación en la represa Coca Codo Sinclair y las reservas de petróleo del país han llevado a condenas de altos funcionarios del gobierno. En Chile, la adquisición por parte de una empresa china de la empresa eléctrica impulsó un esfuerzo bipartidista para restringir las adquisiciones estratégicas por parte de empresas extranjeras de la propiedad estatal.

Rusia es uno de los aliados más acérrimos de Venezuela. El gobierno ruso proporciona servicios económicos y apoyo militar, permitiendo a Moscú una plataforma útil para expandir su influencia en la región. Cuba también es un partidario importante del régimen de Maduro. Al igual que China, Cuba está explotando la pandemia del COVID-19 para revitalizar su alcance médico en la región. En Nicaragua, el gobierno ruso proporciona tanques, armas y tropas y ha [construido un centro de capacitación conjunta](#) contra el narcotráfico, intentando replicar el apoyo que ha brindado Estados Unidos en América Central.

NDI está trabajando para construir redes regionales con la capacidad de monitorear inversiones y acuerdos y detectar irregularidades e interrumpir la manipulación de la información. En América Latina, NDI ha identificado redes ambientales e indígenas que promueven la transparencia y cumplimiento de las leyes nacionales. La democracia debe actuar a favor de la economía social, el desarrollo, la seguridad y la justicia. **Los programas que trabajan con periodistas independientes, grupos de vigilancia de la sociedad civil y legislaturas para crear conciencia y arrojar luz sobre los aspectos dañinos de las influencias extranjeras en sus países y la región merecen un mayor apoyo.**

Oportunidades para fortalecer la gobernabilidad democrática

La importancia de la región para Estados Unidos se pone de manifiesto a diario gracias a los profundos vínculos y desafíos compartidos que van desde el cambio climático hasta la lucha contra el narcotráfico y la migración los cuales requieren de un estrecho abordaje de colaboración y cooperación. Estados Unidos debe considerar las siguientes áreas de participación que pueden ayudar a fortalecer la gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe:

- La Novena Cumbre de las Américas brinda la oportunidad de revitalizar el compromiso regional con los principios democráticos fundamentales y el respeto de los derechos humanos consagrados en Carta Democrática Interamericana y adoptada por unanimidad hace 20 años. Como el anfitrión de la cumbre, Estados Unidos puede perseguir resoluciones que subrayen la necesidad de salvaguardar colectivamente los derechos humanos y elecciones libres y justas; y promover la transparencia y rendición de cuentas. Reafirmar estos valores y respaldar con acciones será clave en la medida que países antidemocráticos como Rusia y China busquen expandir su economía negativa, papel político y de seguridad en el hemisferio.
- Estados Unidos junto con sus aliados y socios internacionales y regionales con ideas afines pueden ayudar a crear entornos propicios para la resolución de las múltiples crisis en América Latina. Al tratar con regímenes autoritarios, Estados Unidos debería utilizar todas sus herramientas de políticas disponibles, incluyendo la implementación de la innovadora La Ley de Transparencia aprobada en el año 2020 para poner fin a la capacidad de los actores corruptos de ocultar fondos robados detrás de corporaciones fantasmas. Además, la política estadounidense en Venezuela y Nicaragua debe continuar reforzando las agendas de consenso entre los grupos de oposición para lograr objetivos comunes.
- Como se dice a menudo, las elecciones son un componente esencial, pero una condición insuficiente para una democracia sostenible. [En la experiencia del NDI](#), las dinámicas políticas corruptas son precursoras de elecciones defectuosas y sirven como catalizadores para crear inestabilidad. Por lo tanto, el compromiso internacional de EE.UU. y la participación regional no debe comenzar ni terminar el día de las elecciones. El apoyo para mejorar la gobernanza democrática entre elecciones es una inversión necesaria para promover un mayor entorno estable que sirva a los intereses

de los países de la región y, en última instancia, a alcanzar los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos.

- La asistencia democrática sostenida de Estados Unidos en el norte de Centroamérica es necesaria para mejorar la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas; todos ellos elementos esenciales para alcanzar los objetivos de desarrollo y seguridad. Las iniciativas de rendición de cuentas solo pueden tener éxito cuando hay apoyo tanto interno como externo. Estados Unidos debería proporcionar un fuerte respaldo a los reformadores tanto dentro como fuera del gobierno. Finalmente, El fuerte deseo de los centroamericanos es que la política exterior de Estados Unidos tome en cuenta toda la subregión, incluyendo a los países vecinos interconectados fuera del Triángulo Norte.
- Los gobiernos autoritarios están encontrando usos más sofisticados y antidemocráticos de tecnologías para vigilar, subvertir y controlar a sus ciudadanos. Un esfuerzo unido entre las democracias ha logrado algunos avances para garantizar que las nuevas tecnologías se utilicen para apoyar libertad y derechos humanos. Estados Unidos debe promover [la integridad del espacio de información subyacente](#), por lo que las comunicaciones auténticas sustentan la legitimidad y resiliencia de las democracias en todo el mundo.

Presidente Menéndez, miembros de alto nivel y miembros del Comité, gracias nuevamente. por la oportunidad de testificar y espero sus preguntas.